

N.º 101

SUPREMA CORTE DE JUSTICIA:

El Fiscal de Corte y Procurador General de la Nación en estos autos caratulados: **“L.M.E.H. UN DELITO CONTINUADO DE ESTAFA. CASACION PENAL” I.U.E. 240-182/2007** expone:

ANTECEDENTES PROCESALES

1.- E.H.L.M fue condenado como autor penalmente responsable de un delito continuado de estafa, a la pena de doce (12) meses de prisión, por sentencia n° 55 del 6/11/18 dictada por la Sra. Juez Letrado de Primera Instancia de 1º Turno de Durazno (fs. 1378-1389 vta.).

El Tribunal de Apelaciones en lo Penal de 2º Turno, por sentencia n° 17 del 21/4/20, confirmó la sentencia de primera instancia (fs. 1473-1479).

La defensa del imputado, interpone recurso de casación, y solicita el sobreseimiento (fs. 1482-1487).

La Sala por decreto n.º 214 del 13/5/20, dispuso elevar las actuaciones a la Suprema Corte de Justicia (fs. 1488).

La Corporación por sentencia n.º 625 del 25/6/20, dio ingreso al recurso y confirió traslado del mismo (fs. 1494), el cual fue evacuado por la Fiscal Letrada Departamental de Durazno de 1º Turno, quien por los fundamentos expuestos en escrito que luce de fs. 1504 a 1507, peticiona que se rechacen los argumentos esgrimidos por la defensa.

Por providencia n.º 812 del 27/7/20, la Corporación confirió vista al Fiscal de Corte (fs. 1510), la cual se efectivizó el 31/7/20 (fs. 1511 y vta.).

El recurrente plantea sus agravios en la siguiente forma:

- Art. 347 CP

Sostiene que existe una errónea aplicación de esta norma

El supuesto engañado es el Comando de la Fuerza Aérea y no Soust, por lo que no se puede configurar el tipo penal planteado, ya que es necesario que el engaño sea causa de la equivocación de la víctima, con la ausencia de este elemento no encuadra, ni se configura de ninguna forma el tipo penal.

Y en cuanto a la configuración del elemento: “un provecho injusto”, señala que los cónyuges O. y S. contrajeron una deuda ganancial, por lo que ambos responden por dicha deuda, y se procedió a obtener el cobro del crédito, solicitando a la Fuerza Aerea el descuento salarial correspondiente de los ingresos de S., pues al tratarse de una deuda asumida por ambos cónyuges, podía legítimamente efectivizar su cumplimiento en el patrimonio de cualquiera de ellos (arts. 1955.2 y 1965.1 CC).

No se configura la puesta en escena y no existe provecho injusto, y por ende no hay estafa de ninguna manera. Se trata de una pequeña cooperativa del interior, donde se hizo confianza en la persona (S.) que en los hechos era socio, siendo él quien reconoce que interactuaba con la cooperativa y se servía de ella, se le daban ticket, aunque formalmente no fuera socio, pero en los hechos se los trataba como socios a los integrantes del matrimonio S. y O.

- Arts. 1955 y 1965 del Código Civil.

Afirma que si se aplicaran y no se infringieran estas normas, se determinará que S. era deudor, y por lo tanto cobrarle a él no es provecho injusto

- Arts. 1252 y 2197 del Código Civil.

Estas normas consagran que el mutuo o préstamo de consumo, no exige solemnidades para su configuración, rigiendo el principio de

consensualidad, siendo perfectamente válida su celebración por medios verbales como efectivamente se hizo, y en consecuencia el Sr. S adquirió la calidad de socio, pues para ello, basta el concierto de ciertas operaciones con la cooperativa.

CONSIDERACIONES JURIDICAS

A criterio de esta Fiscalía, el recurso en vista deberá ser desestimado, de acuerdo a los fundamentos que se pasan a exponer.

- Art. 347 CP

En virtud de que no existe controversia en cuanto a la plataforma fáctica, los agravios se centran en el encuadre jurídico de la misma en la figura delictiva imputada. Y en este sentido, no le asiste razón al recurrente, puesto que se dan en la especie, todos los elementos configurativos del delito de estafa.

Es así que de los extremos de hecho dados por probados, surge que el imputado fue presidente de la cooperativa CODUR, y era quien autorizaba los préstamos que otorgaba la cooperativa, asimismo fue integrante de la Fuerza Aérea Uruguaya desempeñándose en tal actividad en el Departamento de Durazno entre 1970 y 1986, continuando luego de pasar a retiro, vínculos con la misma.

La socia de CODUR, G.O., funcionaria municipal, operaba con esta cooperativa y firmó vales como contraprestación de préstamos de dinero que le otorgaba la cooperativa, y cuyo cobro se efectuaba mediante descuentos que hacía su empleadora de su salario (Intendencia Departamental de Durazno). Ello fue así hasta que la deuda ascendió a un monto tal que no podía cancelarse

con los descuentos de su sueldo, por exceder los mismos el 30 % de su salario, y es ahí entonces cuando el imputado decide cobrar la deuda de O. o a S..

Para ello elaboró una estratagema que consistía en enviar una lista en soporte CD a la Fuerza Aérea, para que se le realizara el descuento a S., a sabiendas de que el no era socio de la cooperativa, y cobrando indebidamente a este, lo que en realidad era adeudado por la Sra. O., quien fue la que suscribió los vales

Para realizar esta maniobra, contaba asimismo con la ventaja de haber tenido una relación con los integrantes de la Fuerza Aérea, a la cual además perteneció y ya lo conocían por su actividad comercial también.

Es así que como señala el Tribunal, L. le manifestó a la Sra. O., “si vos no podes pagar se lo voy a cobrar a tu esposo...yo le dije bueno anda si querés cobrale porque el estaba en el Congo....a los meses siguientes le cobró a mi esposo....le descontó hasta que vino a Uruguay y él habló con la Fuerza Aérea y le dijeron que era un error...mi esposo no era socio ni fue...” (fs. 614 vta.).

Por otra parte, surge que S. declaro a fs. 542-543 que nunca fue socio de CODUR y que nunca autorizó el descuento que se le exhibe a fs. 274-275.

En definitiva mediante engaño, el imputado logró inducir en error a la entidad estatal señalada, logrando la obtención de descuentos indebidos y el provecho económico por parte de la cooperativa, fruto de las estratagemas desplegadas por L.

El dolo directo que requiere la figura, consiste en la voluntad consciente de inducir en error con ánimo de lograr un provecho injusto en daño ajeno, y tales extremos surgen pristinemente del accionar del imputado que

indujo en error al incluir en la lista de deudores a S. - cuando en realidad no lo era -, a los efectos de que se le efectuaran descuentos, que en realidad, como fuera dicho, eran deudas que mantenía la Sra. O..

En cuanto a la afirmación del recurrente de que el supuesto engañado es el Comando de la Fuerza Aérea y no S., lo que determinaría la falta de adecuación típica en cuanto al sujeto pasivo, tampoco resulta de recibo.

Como sostiene Bayardo Bengoa, en lo que atiene al sujeto pasivo del delito, el mismo no será otro que el titular del derecho de propiedad penal, y es necesario distinguir entre dicho sujeto y el objeto material personal del engaño, que puede no coincidir con él. Dicho de otra manera: el engañado no siempre tiene porqué ser el sujeto pasivo del delito, -es así que ejemplifica nítidamente Soler- se estafa a un menor engañando al tutor, se estafa el banco engañando al cajero (Cf. Fernando Bayardo Bengoa. Derecho Penal Uruguayo. Tomo IX. Parte Especial Vol. VI. Pag. 146).

Y en el presente caso, la Fuerza Aérea fue inducida en error, pero S. fue el perjudicado en su propiedad, al haberse efectuado un descuento indebido en sus haberes salariales.

- Arts. 1965, 1955, 1252 y 2197 del Código Civil.

La recurrencia en este sentido carece asimismo de sustento.

Como señala la Sala, todo el análisis civilista de la defensa no hace a la cuestión de autos, pero de todos modos no le asiste razón.

En primer lugar, la calidad de socio de la Cooperativa que sirve de base al recurrente para alegar la vulneración de estas normas, ha sido totalmente desvirtuada por el material factico allegado a la causa, valorado de acuerdo a las reglas de la sana crítica.

Y no puede haber obligación alguna de parte de S. a cumplir los pagos del préstamo obtenido por O., por el solo hecho de estar casado con quien contrató el mutuo.

Por otra parte, los títulos valores (vales firmados por O.), sólo pueden ser ejecutados directamente al firmante no a un tercero por más que se trate de su conyuge, tal como anota el Tribunal.

CONCLUSION

Por los fundamentos expuestos, procede el rechazo del recurso de casación deducido.

NH/nh

Montevideo, 13 de agosto de 2020

Dr. Jorge Díaz Almeida
Fiscal de Corte y Procurador
General de la Nación